

Santiago, once de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y oídos los intervinientes:

El Cuarto Tribunal Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de 13 de agosto de 2024, procedió a condenar a condenar a **LEONEL EDUARDO BURGOS GAYOSO** a la pena de **TRES AÑOS Y UN DÍA** de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito consumado de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 467 N°1 del Código Penal, en concurso medial con el delito de uso malicioso de instrumento privado, contemplado en el artículo 198 del mismo cuerpo legal, cometidos el 10 de junio de 2019, en la comuna de Estación Central, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Se le impuso, además, una multa de once unidades tributarias mensuales, autorizándose once mensualidades iguales y sucesivas, comenzando el pago de la primera cuota al mes siguiente en que la sentencia quede ejecutoriada. Si no pagare la multa descrita, se le fijó como sustitutiva, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que pueda exceder de seis meses, al tenor de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.

Por no reunirse los requisitos de la Ley N°18.216, el sentenciado cumplirá efectivamente la pena corporal impuesta, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad con ocasión de esta causa, esto es, el día 27 de junio de 2023, según lo certificado por la jefa de la unidad de causas de este Tribunal.

Se le eximió del pago de las costas de la causa.

La defensa penal pública del condenado de autos dedujo recurso de nulidad, invocando como única causal, la de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal.

Este tribunal decidió admitirlo a tramitación, fijándose la audiencia del día 1 de octubre del año en curso para llevar a cabo su conocimiento en esta Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que se cumplió conforme al mérito del acta que se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YPJWXQMVNKL

acompaña, la que da debida cuenta de su realización, con la concurrencia y alegatos de los abogados que en el registro de audio se consignan, actuando en representación del imputado como del Ministerio Público, siendo que, luego de la vista del recurso, se citó en la misma a los intervinientes a la lectura del fallo ordenada para el día de hoy.

Finalmente, debe dejarse debida constancia que al momento de llevarse a cabo la audiencia para el conocimiento del recurso, no se rindió prueba alguna, por lo que no existe ningún antecedente que consignar al respecto.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, tal como se anticipó, la defensa dedujo una sola causal de nulidad, que conforme aparece de su libelo, fue la contenida en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 297, 340 y 342 letra c), referida a cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, letra c), esto es, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y las circunstancias que se dieran por probados fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, al condenar a su representado como : “...*autor del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida en grado de consumado...*”, según consigna expresamente en la página 3 de su escrito de nulidad.

Segundo: Que, desarrollando la causal, alude que la vulneración es al principio de la razón suficiente, toda vez que no existirían pruebas exactas, coherentes y cohesionadas que permitan establecer las exigencias del tipo penal que se investigó, efectuando el Tribunal Oral en lo Penal una errónea valoración de la prueba que incidió sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que la rendida no logró superar el estándar de la duda razonable ni vencer la presunción de inocencia que ampara a su representado.

Tercero: Que, es la afirmación relativa a quién es la persona que efectivamente recibe el dinero producto de la disposición



patrimonial de la víctima y que por lo tanto define la participación de su representado es lo que estima la defensa no se encuentra suficientemente fundado.

Luego analiza la decisión condenatoria y la valoración de la prueba, destacando determinados pasajes de algunos testimonios, para afirmar que la decisión condenatoria en contra de su representado en cuanto a acreditar la participación del mismo en los injustos acusados, en cuando haber sido él la persona que obtuvo el dinero proveniente de la disposición patrimonial perjudicial que realiza la víctima no se encuentra suficientemente probada en autos.

Afirma, que uno es de crucial importancia, la declaración jurada de recepción de dinero, suscrita en la notaría de Gabriel Ogalde, por la suma de \$5.100.000.- pesos, de fecha 10 junio 2019 firmada por Eduardo Prando Peña. Este documento indicaría que la persona que recibe el dinero no fue su representado, lo que también debe ser contrarrestado por lo que depuso otro de los testigos de cargo que supuestamente corrobora la versión de la víctima, el señor Venegas quien indica que “el testigo confirmó que, según el relato de la víctima, el dinero en efectivo se entregó a Prando, después de realizar el trámite notarial”.

Correlaciona que, en su declaración, el imputado entregó una versión alternativa en la que no se atribuye participación en estos hechos, aquello sumado a que el propio testigo de cargo Prando indica que no fue su representado la persona que lo acompañó ese día ya que no lo puede reconocer como la persona que participó con él en la comisión del injusto típico, es que entiende la defensa que el estándar de duda razonable no pudo ser derrotado.

Cuarto: Que, frente a esto, se pregunta la defensa, cómo sería posible que ese testigo corrobore que el dinero fue entregado a Prando si la misma víctima en estrados indicó que el dinero fue entregado a su representado; cómo se condice eso con un documento notarial autorizado que da fe de que se entregó ese dinero en efectivo al coimputado ante el notario en su presencia y cómo esto cobra sentido con el resto de las declaraciones que dicen que el dinero se pagó en el banco estado y no en la notaría. En definitiva, la duda de



a qué persona se le entregó el dinero que dispuso la víctima, dudas no fueron superadas en la fundamentación de la decisión condenatoria en contra del acusado y cobran relevancia a nivel de duda razonable.

Siendo que, en la declaración, el enjuiciado, negó haber recibido dinero alguno respecto de esta supuesta compraventa en la que participó, toda vez que niega haber participado de la misma, esto en concordancia con la deposición del testigo de cargo Prando, que no reconoce al acusado como la persona que lo acompañó a realizar la transacción del vehículo, sumado a que es él quien suscribe el documento notarial de recibo del dinero. Si a esto se le suma el hecho de que el funcionario policial señor Venegas quien indicó que la víctima señaló que el dinero se lo había entregado materialmente al señor Prando, por lo que la única fuente inculpativa es la víctima, que no encuentra siquiera corroboración en la deposición del funcionario policial que le tomó declaración ante las diligencias investigativas ordenadas por el persecutor público.

Quinto: Que, la vulneración del principio de razón suficiente, en el presente caso, sería de la entidad suficiente para invalidar el juicio oral y la sentencia condenatoria, toda vez que existen razones contradictorias entre sí que no permiten tener acreditado el presupuesto fáctico de la imputación en cuanto a existencia del delito.

Por lo tanto, en la opinión de esta defensa existen elementos de contradicción en la prueba aportada al juicio que no lograron el estándar suficiente para cumplir con la exigencia de que la prueba debe ser de tal naturaleza que realmente pueda considerarse fundante de la conclusión, de tal forma que aquella sea excluyente de toda otra, por lo que no se pudo derribar la presunción de inocencia.

Sexto: Que, por todo lo expresado, solicita que se acoja el presente recurso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal, anule la sentencia y el juicio oral en cuanto a la condena por los delitos de estafa en concurso ideal medial con uso malicioso de instrumento privado, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento y remita los antecedentes a



Tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que este disponga le realización de un nuevo juicio oral.

Séptimo: Que, reiteradamente ha señalado esta Corte, que el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una decisión de ineficacia de todos aquellos actos que, dada la causal elegida por la recurrente ubicada dentro de las denominadas motivos absolutos de nulidad, importan necesariamente un perjuicio para el interviniente y, sustancial, desde el momento en que constituyen una infracción manifiesta, en particular a vicios que afectan a la sentencia por falta de fundamentación en la exposición, la que ha de ser clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieron por probados, fueren favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren esas conclusiones, todo ello de acuerdo a los términos de las causales del artículo 374 letra e) en relación con el artículo 342 letra c) y el artículo 297, todos del Código Procesal Penal, lo que deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que arriba la sentencia.

Octavo: Que, desde la óptica descrita en el motivo precedente y de un atento examen de su recurso, aparece del todo evidente que los cuestionamientos que se realizan en relación a la dinámica factual como a la participación del condenado de autos y a sostener una teoría de defensa diversa de la planteada por el persecutor penal, expresamente la recurrente los relaciona con la valoración efectuada por el tribunal oral, lo que sumado a afirmaciones personales que entrega el impugnante lo llevan a concluir automáticamente un parecer diferente y que a su juicio configuraría la motivación de nulidad esgrimida, generalidades que no permiten alterar la realidad fáctica establecida ni menos la convicción a la que arribaron los jueces respecto de los medios que



lo hubieran permitido.

Noveno: Que, así, el arbitrio se reduce más bien a dar cuenta de una disconformidad con las motivaciones vertidas en la sentencia para concluir de la manera en que se hizo, por lo que no existe motivo para invalidar la sentencia en examen, por lo que no siendo efectiva la trasgresión denunciada, se impone el rechazo de este recurso.

Décimo: Que, en todo caso, examinada igualmente la sentencia cuestionada, lo cierto es que esas supuestas trasgresiones fueron debidamente respondidas por la juez del fondo, explicitando los razonamientos por los que consideró que no se reunían por separado ni en conjunto las alegaciones que planteó en el juicio la defensa del enjuiciado recurrente, haciéndose cargo de la prueba rendida en el juicio oral, en orden a acreditar el tipo penal por el que fue sentenciado y su participación criminal en él.

Undécimo: Que, como se aprecia, es de toda evidencia que el recurrente -pese la precisión que le imponía el ejercicio de un medio de impugnación extraordinario y de derecho estricto como el elegido- solo cuestionó por razones tangenciales y parciales, que la sentencia recurrida vulneraría reglas de valoración, afirmando que no era posible adoptar la decisión de condenar a su defendido, lo que sumado a conclusiones personales que entrega el impugnante respecto de la rendida, de lo que supone automáticamente un parecer diferente, configuraría a su juicio la motivación de nulidad

En efecto, los hechos establecidos en el juicio fueron que durante el mes de junio 2019, a través del portal yapo.cl, la víctima Miguel Villavicencio Navarro, tomó contacto con un sujeto desconocido que ofrecía la venta del vehículo marca Nissan, modelo NP300, año 2018, PPU KSRW-87 en la suma de \$5.500.000 pesos, inscrita con restricción de prenda. De esta forma, siguiendo las instrucciones del supuesto vendedor, el día 10 de junio 2019 concurrió hasta el Mall Alameda Santiago, ubicado en calle Bernardo O'Higgins N°3421, comuna de Estación Central, reuniéndose con los acusados EDUARDO ALBERTO PRANDO PEÑA y LEONEL EDUARDO BURGOS GAYOSO, quienes le



exhibieron la camioneta, y dos documentos consistentes en un poder de venta del vehículo del propietario inscrito Leasing Pie Andino SA., y una inscripción en el registro de vehículos motorizados, documentos que resultaron ser posteriormente falsos. En dicho contexto, concurrieron a una notaría cercana y la víctima entregó la suma de \$5.100.000 pesos en efectivo a los acusados, recibiendo materialmente la camioneta para efectuar la transferencia una vez regularizado el cambio de deudor prendario.

Sin embargo, días después, la víctima fue contactada por personal de una empresa de Renta Car, percatándose que se trataba de un vehículo arrendado por el imputado Burgos Gayoso y que no había sido devuelto, siéndole vendido y entregado por los acusados, a través, de documentación falsa. La víctima, al tomar conocimiento del fraude entregó el vehículo a su legítimo propietario. Los acusados a sabiendas que no tenían poder alguno para hacer el negocio y con el único fin de obtener los dineros del engaño, se valieron de documentación falsa para simular una venta de un vehículo, lo que resultó ser falso recibiendo la suma de \$5.100.000 pesos y causándole el consiguiente perjuicio a la víctima.

Duodécimo: Que, en cuanto a la calificación jurídica, se estimaron constitutivos de los delitos consumados de estafa y uso malicioso de instrumento privado falso, previstos y sancionados en los artículos 468 en relación al artículo 467 N°1 y 198 del Código Penal, respectivamente.

En cuanto al delito de estafa, por la concurrencia del engaño, que en este caso se materializó mediante la oferta fraudulenta de venta de un vehículo sobre el cual los acusados no tenían derecho alguno; el error, provocado en la víctima al creer que estaba realizando una transacción legítima; la disposición patrimonial, consistente en la entrega de \$5.100.000 por parte de la víctima; y el perjuicio, materializado en la pérdida de dicha suma de dinero sin obtener a cambio el vehículo supuestamente adquirido, los que quedaron plenamente acreditados a través de los testimonios de la víctima, el resto de los deponentes de cargo y la evidencia documental presentada.



Y, en cuanto al delito de uso malicioso de instrumento privado falso, sus elementos típicos fueron la existencia de un documento privado falso, en este caso, un poder de venta de vehículo con cláusula autocontrato y otros documentos que fueron analizados en la valoración de la prueba; el conocimiento de la falsedad por parte del hechor; y el uso malicioso de dicho documento, los que se acreditaron mediante el testimonio pericial que confirmó la falsedad de los mismos, así como por las declaraciones de la víctima y otros testigos que dieron cuenta del uso de estos documentos en la transacción fraudulenta.

En relación al delito de estafa, el dolo directo requerido por el tipo penal se dedujo de las circunstancias objetivas acreditadas en el juicio, consistentes en la elaboración de un plan que involucró el arriendo de un vehículo, la utilización de documentos falsos, y la puesta en escena de una venta ficticia, demostraciones inequívocas de la intención del acusado de engañar a la víctima para obtener un beneficio económico ilícito.

Respecto al uso malicioso de instrumento privado falso, el conocimiento de la falsedad de los documentos y la intención de usarlos para perjudicar a otro se desprenden de la misma dinámica de los hechos.

El acusado, al presentar documentos falsificados como genuinos durante la transacción, actuó con pleno conocimiento de su falsedad, pues aquellos fueron utilizados para dar apariencia de legitimidad a una operación fraudulenta.

Décimo tercero: Que, en lo que toca a la participación del acusado Leonel Burgos Gayoso en los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado falso, el Tribunal la tuvo por acreditada en calidad de autor directo, conforme a lo establecido en el artículo 15 N°1 del Código Penal, en base al testimonio de la víctima, Miguel Villavicencio Navarro, quien fue categórico en identificar a Burgos Gayoso como uno de los dos sujetos que participaron en la venta fraudulenta de la camioneta Nissan PPU KSWR-87, precisando que Burgos estuvo presente durante la revisión del vehículo, luego lo acompañó a la notaría, y fue quien



recibió personalmente el dinero de la venta, a pesar de que el documento de recepción fue sólo firmado por Prando.

Además, el testigo Jaime Muñoz Barriga, empleado de Euro Rent a Car, vinculó directamente a Burgos Gayoso con el arrendamiento inicial del vehículo objeto de la estafa. Confirmó que fue Burgos quien arrendó la camioneta en la sucursal de Puerto Montt y no la devolvió en el plazo acordado.

Unido a lo anterior, los registros GPS del vehículo, presentados como evidencia material, corroboraron el trayecto descrito por Muñoz Barriga y coincidieron con el relato de la víctima sobre el momento y lugar del encuentro para la transacción fraudulenta, ubicando inequívocamente a Burgos Gayoso en la comisión de los hechos delictivos.

Además, de relevancia resultó el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima y confirmado por los oficiales Andrés Osvaldo Muñoz Olguín y Sebastián Ariel Lueiza González, identificando a Burgos Gayoso, sindicándolo además durante la audiencia de juicio como uno de los partícipes de la venta fraudulenta. Este reconocimiento, refuerza la identificación del acusado como partícipe directo en los hechos.

Finalmente, la evidencia documental, incluyendo el contrato de arriendo del vehículo y las copias de la cédula de identidad y licencia de conducir de Burgos Gayoso, lo relacionaron directamente con la obtención del automóvil utilizado posteriormente en la estafa. Estos documentos demostraron que el acusado no sólo estuvo presente en la ejecución del delito, sino que participó en su preparación desde el inicio.

En consecuencia, la prueba rendida en juicio, valorada en su conjunto, permitió al tribunal concluir, más allá de toda duda razonable, que Leonel Burgos Gayoso tuvo una participación directa en la comisión de los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado falso, ejecutando personalmente las acciones descritas en el tipo penal, lo que desmiente la aseveración que el tribunal sólo consideró un elemento singular consistente en la declaración de la víctima.



Décimo cuarto: Que, el mismo fallo explica sobre la corroboración que cuestiona la defensa, contrastada con la prueba presentada que incluyó no sólo el testimonio directo de la víctima y de otros testigos de contexto, sino también evidencia documental y pericial que corroboró los hechos de manera suficiente.

Y que, respecto de supuestas inconsistencias de los testimonios sobre cómo y cuándo se entregó el dinero son consideradas por el Tribunal como detalles menores que no afectan la esencia de los hechos probados y en ningún caso alteran la convicción del Tribunal sobre la culpabilidad del acusado., el fallo, en lo concerniente a la participación culpable del acusado se demostró.

Décimo quinto: Que, en consecuencia, el análisis por separado ni en conjunto de las contradicciones que dice ver la recurrente permiten configurar el vicio invocado con el alcance procesal ya advertido, siendo que en definitiva, de los medios de prueba rendidos, a los que se ha hecho debida referencia en la sentencia, cuyo mérito fue lo que permitió adquirir más allá de toda duda razonable la convicción de haberse demostrado la efectividad de los hechos punibles que pretendía el Ministerio Público como la participación culpable del acusado de autos, lo que descarta las deficiencias u omisiones que dice ver la defensa recurrente.

Décimo sexto: Que, por último, lo cierto es que el arbitrio se reduce más bien a dar cuenta de una disconformidad con las motivaciones vertidas en la sentencia para concluir de la manera en que se hizo, ya que no se presenta una real falta de razonamientos o carencia de los consignados en el fallo, ni una omisión de pronunciamiento de alguna prueba y/o argumentaciones del recurrente. Dicha discrepancia no constituye motivo para invalidar el juicio y la sentencia en examen, por lo que no siendo efectiva la omisión denunciada, se impone el rechazo de este recurso en todas sus partes.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 374 y 384, todos del Código Procesal Penal, se decide que:

Se **RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por la Defensoría Penal Pública, actuando en representación del acusado



LEONEL EDUARDO BURGOS GAYOSO, dirigido en contra de la sentencia de trece de agosto de dos mil veinticuatro, cuya copia corre agregada a esta carpeta como en contra el juicio oral que le antecedió, todo en el proceso RIT 430-2024, RUC 1900830022-7, seguidos ante el Cuarto Tribunal Oral en los Penal de Santiago, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Sr. Alejandro Rivera M.

Ingreso Corte Penal Rol N° 4976-2024.

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la abogada integrante señora María Fernanda Vásquez Palma. No firman, pese haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, el ministro señor Zepeda, por encontrarse en comisión de servicio y la abogada integrante señora Vásquez, por no encontrarse al momento de hacerlo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YPJWQMVKL

Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a once de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>
Código: YPJWXQMVNKL